

Boletín



Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.
Se suscribe en esta capital, Imprenta de D. Francisco Paz, Fuente del Rey núm. 18.
—En las demás provincias, en las principales librerías.

PRECIOS DE SUSCRIPCION, en Orense, por trimestre, 2 ESCUDOS.

—Para fuera de esta capital, franco de porte por trimestres adelantados, 3 ESCUDOS.

—Números sueltos, 150 MILÉSIMAS.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación en telegrama de 4 del actual me dice lo siguiente:

«No ocurre novedad. Siguen presentándose a indulto los dispersos carlistas, habiéndolo hecho hoy en Castellón, 28.»

Lo que tengo la satisfacción de comunicar a los habitantes de esta provincia. Orense 4 de setiembre de 1869.—El Gobernador, Alejandro Gonzalez Olivares.

El Ilmo. Sr. Regente de la Audiencia de este territorio en comunicación de 31 de agosto último me dice lo siguiente:

«Siendo necesario que los Jueces de paz, suplentes y Secretarios de los Juzgados de esa clase reúnan los requisitos que las disposiciones vigentes previenen, y teniendo conocimiento de que en algunos de esos funcionarios no concurrían, según A. V. S., que por lo que le conste o por los datos que adquiriera, se sirva informarme a la posible brevedad, acerca de los que se encuentren en dicho caso, para proceder a su separación en la forma que previene S. A. el Regente del Reino, en orden que me fué comunicada por el Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia; y al mismo tiempo he de merecer de la fina atención de V. S. que con separación, leudra a bien remitirme una lista que comprenda por cada Ayuntamiento nueve personas de honradez, fidelidad, y que no tengan incompatibilidad, a fin de que puedan recórrer en ellas los cargos que se hallan ya vacantes o que vacaren por cualquiera motivo, pues las listas antes de ahora remitidas en la mayor parte de los Ayuntamientos, se agotaron completamente.»

Y para que tenga cumplimiento lo dispuesto en la preinserta comunicación, he acordado decir a los señores Alcaldes remitan a este Gobierno en el improrrogable término de doce días los nombres y circunstancias que concurren en los Secretarios de los Juzgados de paz de sus respectivos distritos, y la relación de las nueve personas que reúnan las condiciones que se indican para

cubrir las vacantes de Jueces de paz. Orense 6 de setiembre de 1869.—El Gobernador, Alejandro Gonzalez Olivares.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Sección de patronatos.

El Dean y Cabildo de la Santa Iglesia catedral de Sevilla, con fecha 20 de julio último, ha recurrido a este Ministerio en solicitud de que respecto a los patronatos que administra se le excluya de las disposiciones del decreto de fecha 9 del mismo mes.

La expresada solicitud es manifestamente contraria a los buenos principios de administración, porque siendo a negar el derecho de alta inspección y supremo protectorado que siempre ha ejercido el Gobierno, y el deber cuyo cumplimiento se ha recordado también más de una vez a los patronos y administradores de establecimientos de Beneficencia y de fundaciones de carácter benéfico.

Que de este carácter participan las memorias y patronatos, cuyos objetos son dotar doncellas pobres para contraer matrimonio o ingresar en religión, dar limosnas para socorro de familias menesterosas o para determinados establecimientos, nadie más lo ha desconocido hasta hoy que el Cabildo de Sevilla.

Y que los patronos y administradores de tales memorias tienen y han tenido siempre las obligaciones de cumplir los objetos de ellas, de formar presupuestos, rendir cuentas con justificación, y de satisfacer al protectorado, ya el 2, ya el 10 o el 4 por 100 de sus rentas anuales, no necesitaba declararlo el decreto de 9 de julio; estaba declarado y mandado, y reimpuesto por la ley de Beneficencia de 25 de enero de 1822; por la real cédula de 2 de abril de 1829 para los patronatos de Anda-

lucía; por la orden de la Regencia de 27 de agosto de 1841; por la de 7 de enero de 1842; por la de 25 de marzo de 1846; por la de 17 de setiembre de 1850; por la de 12 de marzo de 1856, y por otras varias disposiciones legales sobre la materia. De modo que el expresado decreto de 9 de julio último, contra el que se reclama y de cuyas disposiciones pretende el Cabildo que se le declare exento, no ha innovado nada; no ha hecho otra cosa que recordar aquellas mismas disposiciones, deplorar su falta de cumplimiento, que ha dado margen a que se cometan abusos dignos de severa corrección, y adoptar medidas para que sea de hoy mas ineludible el cumplimiento de los deberes que pesan sobre los patronos y administradores de las memorias, patronatos y obras-pías. Pero ese decreto, como ni aquellas otras prescripciones legales, no niegan ni merman las facultades y atribuciones que por las fundaciones respectivas tengan los patronos; facultades y atribuciones que a su vez no pueden negar ni merman las de alta inspección y supremo protectorado que corresponden al Gobierno, y que este ejerce por medio de este Ministerio.

En tal conformidad, S. A. el Regente del Reino ha tenido a bien desestimar la pretension del Cabildo catedral de Sevilla, y disponer que se publique esta resolución en la Gaceta para conocimiento de cuantos patronos, administradores de memorias y obras-pías se encuentren en igual caso y pudieran intentar la misma reclamación.

Madrid 25 de agosto de 1869.—Sagasta.—Señor.....

(Gaceta núm. 245.)

MINISTERIO DE FOMENTO.

EXPOSICION.

Señor: El Gobierno Provisional encomendó por decreto de 27 de di-

ciembre de 1868 la defensa y fomento de los montes públicos a un personal compuesto de Ayudantes y guardas, con carácter de empleados periciales aquellos, y sustituyendo los últimos a la suprimida milicia rural. De este modo se llenaron las primeras y más apremiantes necesidades del servicio; pero rano tan importante, del que depende tan principal riqueza, y en que, sin una vigorosa organización y un severo régimen, tantos y tan profundos abusos pueden cometerse, no ha de seguir con el carácter de interinidad que tiene, y que si fué inevitable en los primeros momentos, debe cesar hoy que la Administración comienza a adquirir su perdida fuerza, y que todos los servicios vuelven a su cauce propio y permanente.

Con fines torcidos y calculados propósitos había creado recientemente el último Gobierno de la dinastía derrocada la guardería rural, convirtiendo este elemento administrativo en fuerza pretoriana de un régimen que se hundía, aun más por corrupción propia que por impulso ajeno; y preciso fué disolver cuerpo bajo semejante inspiración creado, con lo que los montes públicos quedaron en abandono completo o a merced del espontáneo y, aunque celoso, incompleto cuidado de los pueblos.

Dirigido el decreto de diciembre a llenar las necesidades de los primeros instantes, no hizo, ni pudo hacer otra cosa, que seguir el sistema que por entonces dominaba en España; pero el Gobierno de V. A., que, conseqüente con los principios proclamados por la revolución, procura llevar tan lejos como en buenos términos es posible el principio descentralizador, no puede menos de aplicarlo a un ramo en que por fortuna solo ha dominado el sistema restrictivo en épocas excepcionales. El indudable éxito de análogas disposiciones descentralizadoras, que de antiguo rigen en la conservación de carreteras; el ejemplo que con

universal, y no ha mu-
do el Ministerio de la Gobernacion
en el ramo de Establecimientos pe-
nales; las medidas que para gran
parte de los empleados de Instruc-
cion pública se han dictado en el de-
partamento mismo que hoy está en-
comendado al Ministro que suscri-
be, le han decidido á proponer al-
quiera sea con carácter provisional,
interino ó definitivo, para resolver el
grave problema de los montes, la
presente organizacion para la guar-
deria, delegando en los Gobernado-
res el nombramiento del personal
subalterno, nombramiento que ha-
brán de hacer en adelante conforme
á un corto número de reglas claras
y sencillas.

Que esta medida descarga de pe-
sado, difícil y enojoso trabajo á la
Administracion central, no hay para
que encarecerlo; que ningún incon-
veniente político puede ofrecer, cosa
es clarísima; y que ganará el servi-
cio; público, de los montes, cuanto
gane la guardia en responsabilidad
y firmeza, es consecuencia lógica de
los buenos principios administrativos.
Pero al propio tiempo, para ser equi-
tativo, estos importantes fines, es ne-
cesario señalar, de un modo claro y
preciso, los deberes y atribuciones de
cada clase, así como sus mutuas re-
laciones y las que han de tener con
las Autoridades civiles.

Lo que desprenderse pueda de las
antiguas Ordenanzas de 1855 es rari-
simo, lo único que ha servido hasta hoy de
regla á los empleados de Montes para
el ejercicio de sus funciones, pues en
los decretos posteriores á dichas Or-
denanzas apenas se hace otra cosa
que modificar las plantillas y variar
las condiciones para el ingreso, y de
aquí se deduce la urgencia de definir
y señalar el círculo de la competen-
cia de cada funcionario. A estos fines
se dirigen los dos proyectos de decre-
to que el Ministro que suscribe tiene
la honra de proponer á V. A.

Madrid 28 de agosto de 1869. —
El Ministro de Fomento, José Echegaray.

DECRETO.

Conferéndole con lo propuesto
por el Ministerio de Fomento, y
Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º El personal subal-
terno encargado, bajo las inmediatas
órdenes de los Jefes de Ingenieros,
de la custodia y fomento de los mon-
tes públicos, se compondrá de los si-
guientes: Ayudantes de Sobreguardas y 500
Guardas que establezca el decreto de
27 de diciembre último, y en el su-
plido anual de 1.000.000 de reales
respectivamente.

Art. 2.º Para ser nombrado don-
dante en este servicio, cuando sub-
sista el título de Bachelier en la
Agrimensura, ó haber servido en el
tercer grado con celo y oportunidad
en clase de Sobreguarda de montes,
acreditando además los conocimientos
prácticos necesarios para desem-
peñar bien su cargo.

Art. 3.º Los Ayudantes serán

nombrados por el Ministerio de Fo-
mento. Los Ingenieros Jefes de los
distritos podrán hacer propuestas do-
cumentadas para la provision de las
vacantes que ocurran en ellas.

Art. 4.º Es requisito necesario
para obtener plaza de Sobreguarda
ó Guarda de montes saber leer y es-
cribir correctamente; tener de 25 á
40 años de edad, y las condiciones de
robustez, agilidad y de buen el
pecho, servicio de los montes, no
menos que las de moralidad y bue-
na reputacion.

Serán preferidos para los nombra-
mientos los cesantes del ramo con
antigüedad, y los licenciados de
el ejército y de la Guardia civil.

Art. 5.º Corresponde á los Go-
bernadores de las provincias el nom-
bramiento de los Sobreguardas y
Guardas, á propuesta de los Ingenie-
ros Jefes.

Art. 6.º No podrá decretarse la
cesantia de ningún funcionario subal-
terno de montes, sin que preceda la
inspeccion de expediente gubernati-
vo, que demuestre su incapacidad,
falta de celo ó de moralidad.

Art. 7.º Las faltas disciplinarias
ó del servicio que no constituyan
delito serán corregidas, segun su im-
portancia, en los términos que pres-
criban los reglamentos.

Art. 8.º Los Ayudantes, Sobre-
guardas y Guardas no podrán ser tra-
tantes en maderas y leñas, ganaderos
ni industriales de cualquiera clase,
que hayan de emplear los productos
de los montes como primicias, mate-
rias.

Art. 9.º Corresponde á la Di-
reccion general de Obras públicas,
Agricultura, Industria y Comercio
distribuir el personal subalterno de
Montes en las provincias con arreglo
á las necesidades del servicio, y al
Ingeniero Jefe señalar dentro de las
mismas el servicio y los puntos de
residencia de sus subalternos, dando
cuenta á la Direccion general.

Art. 10.º En ninguno de los ac-
tos del servicio se presentarán los
Ayudantes, Sobreguardas y Guardas
sin el uniforme y distintivos que de-
termine el reglamento.

Art. 11.º El Estado proveerá de
armamento y distintivos á los So-
breguardas y Guardas. La adquisi-
cion y reposicion de prendas de ves-
tir serán de su propia cuenta.

Dado en Madrid á 28 de agosto
de 1869. — Francisco Serrano. — El
Ministro de Fomento, José Echegaray.

REGENCIA DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL
DE LA CORONA.

Secretaria. — Circular núm. 18.

Por el Hmo. Sr. Subsecretario del
Ministerio de Gracia y Justicia se ha co-
municado, con fecha 20 del mes que
corre, y por el Sr. Regente de esta
Audiencia la orden siguiente:

«Por el Ministerio de Hacienda se
dice á este de Gracia y Justicia, con fe-
cha 12 del actual, que dignese V. A.
disponer que se le remita el expediente de
primera instancia del distrito de la Au-

dencia de esta capital á la Direccion ge-
neral de la Pruda pública copia íntegra
de un expediente que existe en sus ofi-
cinas, manifestó aquella dependencia que
no tenia reparo alguno en remitirla, pero
hizo presente al propio tiempo los incon-
venientes que podrian surgir, en muchos
casos, si sentara el precedente de faci-
litar á los juzgados, á petición de parte,
copias íntegras de expedientes guberna-
tivos, de los cuales pudiera sacarse por
los interesados datos notorios de de-
beres ó de Estado, indicando por tanto

la conveniencia de que se resolviese si
las oficinas del Estado tenían obligacion
de suministrar á los juzgados las referi-
das copias y extractos y noticias re-
lativas á los expedientes gubernati-
vos de las secciones remidas de Hacienda
y Gracia y Justicia del Consejo de Es-
tado, lo ha evacuado segun aparece de
la adjunta copia, manifestando que debia
cumplirse lo dispuesto en las reales ór-
denes de 30 de mayo de 1852, 22 de
noviembre de 1858 y 21 de febrero de

1868 que se refieren á las formalidades
que han de observarse para la comen-
sas que el poder judicial acordara de do-
cumentos expedidos por las oficinas del
Estado, á para facilitar, si procediese,
los mismos documentos originales, cuan-
do los jueces que los reclamaren no re-
sudiesen en el mismo punto que las ofi-
cinas en que existieren los expedientes
de que se trata.

En su vista y considerando que los
expedientes gubernativos que por las re-
feridas oficinas se remiten al poder judicial
empleados en el servicio de sus funcio-
nes, que constituyen debida docu-
mentación para los juzgados, lo
cual no obsta para que los jueces pue-
dan pedir los datos y noticias que con-
dieren necesarios para la mas acertada
administracion de justicia; S. A. el Re-
gente del Reino se ha servido resolver:
primero, que cuando los expedientes
gubernativos se refieren á materias es-
tales: abusos de confianza ó de autoridad
ó de coleccion, cometidos por los emplea-
dos de la administracion pública, que
constituyan delito, como es posible,
con arreglo al Código las dependencias
que los instruyan están obligadas á re-
mitir á los juzgados que deban entender
ó estén entendiendo en las causas que
por estos hechos se instruyan, copias ín-
tegras y certificadas de dichos expedien-
tes para que obren en los procesos con
efectos oportunos; segundo, que fuera
de estos casos, las oficinas de la admi-
nistracion no están obligadas á remitir
á los juzgados copias íntegras de los in-
formes ó las certificaciones con los da-
tos que existan en los expedientes origi-
nales, se observe lo prevenido al efecto
en las repetidas reales órdenes de 30 de
mayo de 1852, 22 de noviembre de
1858 y 25 de febrero de 1868; cuar-
to, que cuando á juicio del juez de
la dependencia que los remite se ul-
timan los expedientes ó se agotan
las diligencias ó certificaciones que son ob-
ligadas á ligar presente á este Ministerio
las instancias que se le dirijan para ob-
tener copias íntegras de los expedientes
de las dependencias y oyendo si fuese

necesario, el Consejo de Estado pueda
resolverse lo que correspondiere; quinto,
que no procede remitir á los juzgados
copias íntegras de expedientes guberna-
tivos que no se hallen en el caso que los
á que se refiere la disposicion primera y
menos remitirlos originales si los recla-
masen, toda vez que los jueces pueden
practicar si, si residen en el mismo
punto que las oficinas en que existan, la
petición oportuna, ó por otro me-
dio, como es el caso, para que se re-
mita á la Direccion de Justicia en los asuntos que se
hallen entendiendo.»

Lo que de orden de S. A. comunico
á V. E., esperando que por el Ministerio
se digno cargo se harán las preven-
ciones oportunas á los juzgados, reco-
mendándoles que cuando tengan que re-
clamar algunos datos ó documentos exis-
tentes en las oficinas del Estado, procu-
ren limitar el pedido á los que sean in-
dispensables para el esclarecimiento de
los hechos que deseen averiguar.

De orden de S. A. el Regente del
Reino, comunicada por el Sr. Ministro
de Gracia y Justicia la orden de S. A.
los efectos oportunos con inclusion de
copia del dictamen del Consejo de Es-
tado de este punto. — 22 de agosto de 1869.
Lola Rivero.

Circular núm. 12.

Promulgada la ley de 10 del mes úl-
timo, sobre el procedimiento para la co-
mbatida de los contrabandos de los contri-
buciones de los establecimientos públicos y re-
sponsabilidad de los montes, y la prevision
de efectos de contrabando, debe cuidar
los jueces de paz á quienes autoriza la
misma para intervenir en esos asuntos,
de prestarles una presente atencion y
de proceder con el mayor celo en el
cumplimiento de las prescripciones que
contiene en su articulo 1.º.

Garantizada hoy, como lo está, la
inviolabilidad del domicilio, como la li-
bertad del ciudadano, señalada honra es
para los funcionarios á quienes está en-
comendada la administracion de justicia
civil en su respectiva localidad, en que
se les confiam los primeros procedimientos
establecidos para garantizar aquellos
derechos inalienables y proteger y ampa-
rarlos, mismo tiempo los intereses gene-
rales, igualmente atendibles, de la Na-
cion.

Los jueces de paz, como deben ser los jueces de
paz, por la índole misma de su oficio, sepa-
rados por completo de la administracion
municipal de la localidad, y consagrados
exclusivamente á la esfera de sus fun-
ciones judiciales y administrativas, no
deben buscar en ellos la mas severa
rectitud é imparcialidad para los casos
precisos en que han de intervenir, ampa-
rando y protegiendo derechos respec-
tales, así del individuo como del Estado.
La responsabilidad es grande, sin duda al-
guna, pero la responsabilidad si fuese
nada de ella se sentiría en su debida
razonabilidad.

El juez de paz en su distrito, es hoy

cohetes que se han comprado de ellos
el aditamento de la sala para el espacio cum-
plimiento de las espaldas, dando vista a
los señores de las espaldas, en vista de
esta, la gente de las espaldas, en vista de
cargo para lo que haya lugar. (abau)
Dios guarde a V. muchos años. Coru-
a 31 de agosto de 1869 — Antonio
Ruiz y Rosas. A los señores jueces

La apertura de ambos Establecimientos tendrá lugar el día 16 del citado mes de setiembre.

[illegible]

Asistencia militar de Orense. — Mes de agosto de 1869.

SECRET

NOMBRES		Número de Fanegas	Precio de la unidad de Ecuados
TRIGO.			
2	Sobrado..... Francisco Gonzalez.....	71	6'600
10	Allariz..... Simon Fernandez.....	39	6'600
15	Merleira..... Luis Pereira.....	77	6'600
21	Mezquita..... Francisco Santiago.....	83	6'500
CEBADA.			
1	Piñero..... Agustin Santiago.....	20	2' "
16	Santa Marina..... Javier Nieto.....	21	3' "
26	Sobrado..... Roque Santos.....	30	1'900
PAJA.			
		Quintales	Costo en Ecuados
1	Piñero..... Agustin Santiago.....	1	0'85
21	Mezquita..... Antonio Cadavid.....	14	76
YERBA SECA.			
1	Santa Marina..... Manuel Dominguez.....	11	53
3'33			

Orensa 31 de agosto de 1869.—El Oficial Administrador, Vito Madrinan y Feijo.—V. B.—El Comisario de Guerra Inspector habilitado, Eddardo de Piso.

REGION:

1.º San Pedro, San Antonio y Animas.
 2.º Orrió, Santa María, San Benito.
 3.º Paralela, anejo de Porquesa, Rosario.
 4.º Pasados Santa María, San Martín.
 5.º Paralela, San Vicente, San Antonio.
 6.º Paralela, anejo de Lobera, Santa Eufemia.
 7.º Paralela de Amociro, Nuestra Señora de los Dolores.
 8.º Idem, Rosario.
 9.º Rubias, Santa María la Magre.
 10.º Río, lugar del Nahallo, Purificación.
 11.º Ravino San Benito, San Juan Bautista.
 12.º Requiza, Santiago, Nuestra Señora de la Fecha.
 13.º Refojos San Verisimo, San Victorio.
 14.º Ravino San Benito, San Benito y Animas.
 15.º Refojos San Verisimo, Nuestra Señora.
 16.º Requiza, Rosario.
 17.º Gondulles, Santa Cruz.
 18.º Tronceda, Concepcion.
 19.º Terrojo, anejo de Servoy, San Mauro.
 20.º Villar de Cages, San Mauro.
 21.º Villavieja, San José.
 22.º Viyero, San Juan, San Benito.
 23.º Villardá, Obra-pia.
 24.º Honzos, San Ciprian, San José.
 25.º Moniqueo, San Salvador, Rosario.
 26.º Ogarites, Rosario.
 27.º Omariz, Nieves.
 28.º Villar de Cages, Rosario.
 29.º Erpededo, San Lorenzo.
 30.º Solveira de Belmonte, San Benito.
 31.º Lovis, Concepcion, conocida por capilla de D. Manuel Martinez.
 32.º Montelouge, Santa Margarita.

En cumplimiento, pues, de esta superior disposicion, tendrán lugar dichos arriendos el día 30 de setiembre del corriente año, de diez á doce de su mañana, en la oficina de la Administración concional establecida en el Palacio Episcopal, con sujeción al pliego de condiciones que estará de manifiesto.

Lo que se hace público por medio de este Boletín oficial, para conocimiento de los interesados que quieran tomar parte en los citados arriendos.

Por último, encargo tambien á los arrendatarios de años anteriores y mas pagadores de renta á este fondo-pio, que se hallan en descubierto, tanto de sus respectivos débitos, verifiquen el pago

inmediatamente si quieren evitar apremio. Orense 31 de agosto de 1869.—El Administrador, José Benito Lobit.

Ayuntamiento de Canedo.

No habiéndose presentado mas aspirantes a la Secretaría de este Ayuntamiento que D. Severino de Pavia que la desempeña interinamente, y estando terminado el plazo de los treinta dias de la publicación de la vacante de aquella, he acordado en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 101 de la ley municipal vigente, hacerlo público para que durante los quince dias siguientes al de la inserción del presente anuncio, puedan dirigirse a la Secretaría del Ayuntamiento, las reclamaciones que se crean conducentes contra la aptitud legal del pretendiente.

Canedo 4 de setiembre de 1869.—El Alcalde, Agustín Gutierrez.

PROVIDENCIAS JUDICIALES.

D. Pedro Cardero, escribano del juzgado de primera instancia de la ciudad de Orense y su partido.

Certifico que en pleito seguido en este referido juzgado y por mi oficio recayó la sentencia del tenor siguiente:

En la ciudad de Orense a 16 de agosto de 1869, el Sr. D. Manuel Fernandez Bastos, juez de primera instancia de la misma y su partido, habiendo visto estas actuaciones, y

Resultando que en 29 de marzo último el Procurador D. Manuel Maria Garcia a nombre de José Labrador Fernandez, vecino de Sta. Marta de Moreiras, ayuntamiento del Pereiro, solicitó que Domingo Cid del lugar de la Deriva, parroquia de San Juan de Moreiras, ayuntamiento citado, compareciera a reconocer la corteza del documento simple que exhibía otorgado a favor de dicho Labrador en 24 de octubre de 1868, y por el que se obligaba a pagar la suma de 71 escudos en dos plazos iguales que vencían en 9 de noviembre y 7 de diciembre del propio año:

Resultando que comparecido el Domingo Cid para el objeto de que va hecho mérito manifestó no ser deudor al Labrador mas que de 250 rs., pues si bien otorgara a favor de este un documento simple, creyó no se comprendía en él mas de aquella suma por la razón de ignorar el valor de un escudo:

Resultando que conferida vista al indicado Procurador Garcia de la declaración prestada por el Cid, propuso aquel demanda de menor cuantía contra el último previo juicio conciliatorio sin efecto fundado en los hechos siguientes:

Primero. Que Domingo Cid estaba adeudando a su representado la suma de 71 escudos procedentes de varias partidas de fruto del año de 1866, según ajuste de cuentas por ambos practicado como lo acreditaba el documento simple de que va hecho mérito.

Segundo. Que a juzgar por el mismo el referido Cid se obligaba a pagar el citado débito en dos plazos iguales que habían de vencer en 9 de noviembre y 7 de diciembre del año próximo pasado.

Tercero. Que habiendo vencido dichos plazos, y el deudor fallando al cumplimiento de lo estipulado nada había satisfecho.

Cuarto. Que pedida y prestada por el Cid la declaración referida, manifestara ser cierto el otorgamiento del mencionado documento, pero no alique adeudase la suma que está expresada, y

Quinto. Que habiendo a conciliación el Cid no hubiera avenencia, y concluyendo a que en definitiva se condenase al demandado al pago de los 71 escudos y las costas.

Resultando que entregadas las copias simples de la referida demanda al Domingo Cid, se compareció a contestarla, por lo

que se le acusó y fué estimada la correspondiente rebeldía:

Resultando que recibido el pleito a prueba durante este trámite, se propuso y suministró solo por parte del demandante la que creyó conveniente:

Considerando que por el referido demandante se ha justificado con suficiente número de testigos la corteza del documento relacionado, sin que para destruir la baste la excepción propuesta y no probada por el demandado de haber sufrido equivocación en la clase de moneda en que la deuda se expresaba:

Falla que debia de condenar y condena al demandado Domingo Cid al pago de los 71 escudos y las costas. Y por este su sententia difinitivamente juzgando, que se publique en el Boletín oficial de la provincia por la rebeldía del demandado, así lo pronuncio manda y firma el mencionado señor juez, de que yo escribano doy fe.—Manuel Fernandez Bastos.—Ante mí, Pedro Cardero.

Y conforme a lo mandado, expido el presente. Orense y agosto 26 de 1869.—Pedro Cardero.

D. David Falcon, secretario del juzgado de paz de Cénle.

Certifico que en el mismo a instancia de D. Francisco Lafuente, propietario de la parroquia de Santa Maria de San Clodio, ayuntamiento de Leiro, como marido de Doña Francisca Mosquera, se promovió juicio verbal contra Maria Francisca Fajardo, viuda, labradora del pueblo de Cuias en este distrito sobre reclamación de atrasos de renta foral en vino, en cuyo juicio se ha declarado rebelde a la demanda y recayendo despues de sustanciado en forma la sentencia que a la letra dice:

En el juzgado de paz de Cénle a 21 de junio de 1869, el Sr. D. Domingo Borroja, juez en este distrito, habiendo visto el expediente que antecede promovido por Don Francisco Lafuente, propietario de Santa Maria de San Clodio, contra Maria Francisca Fajardo, labradora del pueblo de Cuias, sobre reclamación de atrasos de renta, poníendome secretario dije:

Resultando que el D. Francisco Lafuente como marido de Doña Francisca Mosquera, demandó a la Maria Francisca Fajardo sobre pago de seis ollas de vino de renta foral con que anualmente estaba en posesión de contribuirle y que la adeudaba de los años de 1866, 67, y los anteriores desde el 66 al 62 ambas inclusive, cuyos atrasos forman el total de seis meses y seis ollas que la reclama en especie ó en su equivalencia 60 escudos:

Resultando que en el día señalado para el juicio no compareció la demandada, por cuya razón a petición del autor, se le declaró en rebeldía, y siguió el asunto en tal sentido, decretándose a la vez la retención y embargo de bienes de aquellas:

Resultando que el demandante para su prueba ha presentado tres testigos que fueron examinados:

Considerando que por las declaraciones de dichos testigos se justifica plenamente que Maria Francisca Fajardo, está en el deber y obligación de contribuir anualmente a D. Francisco Lafuente como marido de Doña Francisca Mosquera con seis ollas de vino de renta en cada anualidad, y

Considerando que no se ha acreditado que el receptor haya reclamado la especie, al tiempo de la cobranza de los años respectivos de que procede el débito:

Falla que ha lugar a la demanda interpuesta, y en su consecuencia condena a Maria Francisca Fajardo al pago de seis meses y seis ollas de vino de renta reclamada por D. Francisco Lafuente al precio que resulte de los fijados por el ayuntamiento de este distrito en los años referidos con las costas, procediéndose para la liquidación conforme a lo dispuesto en el artículo 898 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil. Y por esta sentencia que además de notificarse al demandante y en estrados por rebeldía de la demandada,

se haga pública por medio de anuncio que se dirija al Sr. Gobernador civil de la provincia para su inserción en el Boletín oficial de la misma, según lo prevenido en el art. 1190 de la propia ley, difinitivamente juzgando, lo pronuncio, manda y firma dicho señor juez de que yo secretario certifico.—Domingo Borroja.—David Falcon.

Y conforme con lo mandado, expido el presente que firma en Cénle a 19 de agosto de 1869.—David Falcon.

Don Juan Ferrer y Hermida, juez de primera instancia del partido de Carballo.

Por el presente cito, llamo y emplazo a Ignacio y José Ponte, Montes, naturales y vecinos de la parroquia de San Salvador de Sofán, para que dentro de treinta dias a contar desde la inserción del presente en los Boletines oficiales de Galicia se presenten en este juzgado por la extralimita del infrascripto a responder a los cargos que contra ellos resultan en la causa que se les sigue por lesiones a Antonio Canedo y Manuel Fernandez, bajo apercibimiento de que en otro caso les parará el perjuicio consiguiente.

Dado en Carballo a 31 de agosto de 1869.—Jesus Ferrer y Hermida.—De su orden, Gregorio Rapado.

Registro de la Propiedad de Orense.

Continúa la relación de las inscripciones defectuosas que aparecen en los libros antiguos del Registro de la propiedad de Orense desde el año de 1800 a 1863, pertenecientes a los once ayuntamientos que comprende.

AYUNTAMIENTO DE LA PEREIRA.

Concepto.—Nombre y cantidad de las inscripciones.—Idem de las adquisiciones libradas en folio.

Sub-fero, Manuel Rodríguez de Cincos Nogueiras, Ramon Gonzalez de la Ponsa, idem, 43.

Venta, Angela Varquez de Carballoira, Juan Rodríguez de Moreda, id., 44.

Id., Benita de Nove de Armentel, Don Domingo Lorenzo de Redegues, id., 45.

Sub-fero, Antonio Suarez de Outeiro, Manuel Lopez de Teyoso, id., 46.

Venta, Josefa Pabon de Orde, Juan Lopez de Castegustola, id., 47.

Id., Manuel de Castro de San Mamed, Antonio Castro de Andole, id., 48.

Testamento, José Lopez de Terraballa, Francisco Lopez y Juan Bercarril, id., 49.

Legato, Esteban Rodríguez de Resleira, Maria Rodriguez, id., 50.

Venta, José Corid de Armentel, Josefa Calvino de Armentel, id., 51.

Id., Francisco Rodriguez de Fuentecada, Juan Prado de Fuentecada, id., 52.

Hipoteca, Cayetano y Miguel Varquez de Villarrubia, li. Ramon y Antonio Bouza Villarrubia, id., 53.

Venta, José Bouzo de Fuentefria, Fernando Gomez de Fuentefria, id., 54.

Id., Luis Fernandez de Melias, José Varquez y otros de San Ginés, id., 55.

Id., Ramon Gonzalez de Búbal, José Varquez de la Peroja, id., 56.

Id., Javier Bouzo de Gustey, Juan Perez de Cincos Nogueiras, id., 57.

Convenio, Manuel Rodriguez del Búbal, Domingo Blanco de Gueral y otros, id., 58.

Venta, Lorenzo Dominguez, Esteban Lopez de Buchos, id., 59.

Id., D. Josefa Temes, José Maria Blanco de Ausaria, id., 60.

Id., Francisca Gomez, Domingo Pabon de Villarrubia, id., 61.

Hipoteca, D. Juan Lopez de San Ginés, D. Camilo N. Losada, id., 62.

Venta, Luis Suarez de Guisaca, Josefa Suarez de Olleros, id., 63.

Id., Domingo Sempayo de Gustey, Maria Bouzo de Cincos Nogueiras, id., 64.

Id., Benito y José Rodriguez de Armentel, Esteban Rodriguez de Andole, id., 65.

Id., Manuel Lopez de Villarrubia, Antonio Amorin de Villarrubia, id., 66.

Id., Antonio Amorin, Manuel Lopez de Villarrubia, id., 67.

Id., Domingo Sempayo, Gustey del Búbal, Camila Gonzalez de Idem, id., 68.

Obligación, D. Juan Perez de Bivela de Miño, D. Carlos Arce del Piñeiro, id., 69.

Venta, Joaquín Gonzalez de las Lamas, José Pereira de Gueral, id., 70.

Id., Domingo Varquez de San Cristóbal, Manuel Bouzo de Villarrubia, id., 71.

Id., Luisa Varquez de Armentel, Domingo Estanandez de idem, id., 72.

Id., Manuel Rodriguez y su mujer, Pedro Gonzalez de Celagaytes, id., 73.

Id., Manuel Gonzalez de Salgueiros, Ramon Nove de Ebréda, id., 74.

Id., D. José María, Santa Maria de Albr., D. Maria Megia, Santa Maria de Albr., idem, 75.

Id., D. José María, Santa Maria de Albr., D. Maria Megia, Santa Maria de Albr., idem, 76.

Id., D. José María, Santa Maria de Albr., D. Maria Megia, Santa Maria de Albr., idem, 77.

Id., D. José María, Santa Maria de Albr., D. Maria Megia, Santa Maria de Albr., idem, 78.

Id., D. José María, Santa Maria de Albr., D. Maria Megia, Santa Maria de Albr., idem, 79.

Id., D. José María, Santa Maria de Albr., D. Maria Megia, Santa Maria de Albr., idem, 80.

Id., D. José María, Santa Maria de Albr., D. Maria Megia, Santa Maria de Albr., idem, 81.

Id., D. José María, Santa Maria de Albr., D. Maria Megia, Santa Maria de Albr., idem, 82.

Id., D. José María, Santa Maria de Albr., D. Maria Megia, Santa Maria de Albr., idem, 83.

Id., D. José María, Santa Maria de Albr., D. Maria Megia, Santa Maria de Albr., idem, 84.

Id., D. José María, Santa Maria de Albr., D. Maria Megia, Santa Maria de Albr., idem, 85.

Id., D. José María, Santa Maria de Albr., D. Maria Megia, Santa Maria de Albr., idem, 86.

Id., D. José María, Santa Maria de Albr., D. Maria Megia, Santa Maria de Albr., idem, 87.

Id., D. José María, Santa Maria de Albr., D. Maria Megia, Santa Maria de Albr., idem, 88.

Id., D. José María, Santa Maria de Albr., D. Maria Megia, Santa Maria de Albr., idem, 89.

Id., D. José María, Santa Maria de Albr., D. Maria Megia, Santa Maria de Albr., idem, 90.

Id., D. José María, Santa Maria de Albr., D. Maria Megia, Santa Maria de Albr., idem, 91.

Id., D. José María, Santa Maria de Albr., D. Maria Megia, Santa Maria de Albr., idem, 92.

Id., D. José María, Santa Maria de Albr., D. Maria Megia, Santa Maria de Albr., idem, 93.

Id., D. José María, Santa Maria de Albr., D. Maria Megia, Santa Maria de Albr., idem, 94.

Id., D. José María, Santa Maria de Albr., D. Maria Megia, Santa Maria de Albr., idem, 95.